

Acta 12

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con un minuto del martes veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés, se reunieron para llevar a cabo la **sesión extraordinaria** de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, bajo la modalidad a distancia a través de la plataforma de videoconferencias *Zoom*, las siguientes ciudadanas y ciudadanos:

Brenda Canchola Elizarraraz	consejera presidenta
Beatriz Tovar Guerrero	consejera electoral
María Concepción Esther Aboites Sámano	consejera electoral
Nora Maricela García Huitrón	consejera electoral
Sandra Liliana Prieto de León	consejera electoral
Antonio Ortiz Hernández	consejero electoral
Luis Gabriel Mota	consejero electoral
Indira Rodríguez Ramírez	secretaria ejecutiva
Edgar Castro Cerrillo	representante propietario del PRI
Daniel Alejandro Mares Sánchez	representante propietario de MC
Luis Ernesto Barbosa Ponce	representante propietario de Morena

En desahogo del **punto uno** del orden del día, relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal, la secretaria ejecutiva comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión.

En desahogo del **punto dos** del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso; del orden del día, la secretaria ejecutiva procede a la lectura del mismo y refiere que contiene los siguientes puntos:

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
3. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida;
4. A propuesta de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 05/2022-PSO-CG; y
5. Clausura de la sesión.

Acto seguido la consejera presidenta pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse intervenciones se somete a votación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

En desahogo del **punto tres** del orden del día, relativo al informe de la Secretaría a sobre la correspondencia recibida, la secretaria ejecutiva da cuenta de la misma:

Primera. Con el escrito signado por Luis Ernesto Barbosa Ponce, representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido el tres de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual solicita a este Instituto abstenerse de realizar cualquier tipo de retención por concepto de remanente a las ministraciones de financiamiento público del partido político Morena, en atención a que en cumplimiento a la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-61/2023, se requiere que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se pronuncie respecto de los montos que fueron erogados con cargo a los remanentes, mediante un procedimiento en el que se otorguen las garantías de audiencia y se sigan las formalidades esenciales del mismo.

El Consejo General por conducto de su presidenta acuerda ordenar a la Secretaría Ejecutiva que remita el escrito de cuenta a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.

Segunda. Con el Oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/01458/2023** signado por Claudia Urbina Esparza, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, relacionada con los documentos básicos de los partidos políticos nacionales respecto del cumplimiento de temas como: paridad de género, prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, participación política de personas indígenas y de grupos en situación de vulnerabilidad.

Con el Oficio **INE/DEOE/0523/2023** signado por María del Carmen Colín Martínez, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relacionada con la reutilización de urnas en próximos procesos electorales.

Con el Oficio **INE/DEOE-UTSI/007/2023** signado por María del Carmen Colín Martínez y Jorge Humberto Torres Antuñano, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, respectivamente, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Coahuila, relacionada con las facultades y atribuciones del Consejo General de ese Instituto para revisar, realizar pruebas y validar el correcto funcionamiento de la urna electrónica.

Con el Oficio **INE/UTF/DRN/7938/2023** signado por Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se da respuesta a la consulta

formulada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, relacionada con la pérdida de registro del partido político Nueva Alianza Chiapas y el proceso de liquidación del mismo.

Estos documentos fueron recibidos los días once, diecisiete y veintidós de mayo de dos mil veintitrés, mediante los cuales se da respuesta a las consultas formuladas por los Organismos Públicos Locales Electorales referidos en la cuenta.

El Consejo General por conducto de su presidenta acuerda tener por hechas las comunicaciones que en la misma se refieren e incorporar los oficios y sus anexos al expediente respectivo, toda vez que el once, dieciocho, veintidós y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General mediante correo electrónico.

En desahogo del **punto cuatro** del orden del día, relativo a la propuesta de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 05/2022-PSO-CG y debido a que fue remitido con la convocatoria, la secretaria ejecutiva solicita que se le exima de su lectura.

En seguimiento a la petición de la secretaria, se somete a votación su solicitud, misma que es aprobada por unanimidad de votos.

La consejera presidenta antes de poner a consideración este proyecto de resolución, le solicita a la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, apoye con una breve explicación de lo que trata este punto para que las personas que nos sigan a través de las redes sociales conozcan el punto que estamos abordando.

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero en uso de la voz manifiesta lo siguiente: Muchas gracias presidenta, muy buenas tardes a todas y a todos. El presente proyecto de resolución que se pone a su consideración corresponde al expediente del procedimiento ordinario sancionador identificado con el número de expediente 05/2022-PSO-CG.

Este procedimiento deriva de la vista realizada a la Unidad Técnica Jurídica de este Instituto mediante acuerdo CGIEEG/317/2021 emitido por este órgano colegiado, a efecto de que se sustanciaran los procedimientos sancionadores correspondientes en atención a la resolución INE/CG1349/2021 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidatas y los candidatos a cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Guanajuato.

Respecto del Partido Acción Nacional del que se advirtió el presunto incumplimiento a la obligación de destinar el financiamiento entregado

exclusivamente para los fines legalmente permitidos, al presumirse la presunta erogación por un concepto de sesenta y tres despendas con un importe de veintiocho mil doscientos ochenta y siete pesos.

El proyecto de resolución que se somete a su consideración parte del análisis de los hechos atribuidos a cada una de las partes denunciadas, en este caso al partido Acción Nacional, a la ciudadana Rocío Ambriz Arredondo otrora candidata a diputada federal del distrito XIII de Valle de Santiago postulada por el referido partido, en su carácter de administradora de la empresa moral Agroservicios el Jarrón Azul S.P.R. de R.L. y Alejandro Alanís Chávez otrora candidato a la presidencia municipal de Valle de Santiago postulado por el mismo instituto político.

Derivado del análisis de las constancias que obran en el expediente y todos los medios probatorios, se establece que respecto de las visitas de verificación y monitoreo realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización en las que se hizo constar que un grupo de personas del municipio de Valle de Santiago, entre ellas personas simpatizantes de otro partido político, detuvieron una camioneta que presuntamente pertenece a la empresa el Jarrón Azul, dicho vehículo contenía despendas, así como una playera con información del entonces candidato a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional, Alejandro Alanís Chávez.

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente no fue posible identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a esta autoridad resolutora determinar la participación de las personas denunciadas respecto de la conducta que se les atribuye, ya que únicamente se precisa que fueron localizados productos de la canasta básica al interior de un vehículo de motor, mismo que se encontraba en movimiento y que fue detenido a efecto de ser cuestionado, sin precisar el nombre o nombres de quienes circulaban en dicho vehículo así como tampoco se precisó el destino o finalidad de los productos.

De los medios de prueba que obran en el expediente es posible advertir que, en materia de fiscalización el Partido Acción Nacional omitió reportar en el sistema integral de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los egresos generados por concepto de sesenta y tres despendas valuadas en veintiocho mil doscientos ochenta y siete pesos moneda nacional. Sin embargo, no se acredita que las personas denunciadas hayan participado en la aplicación del financiamiento del que disponía el citado partido político y que éste además fuera utilizado para fines distintos para el que fue entregado.

Es decir, sólo se verificó la existencia de un número indeterminado de productos de abarrotes, desconociéndose su ubicación exacta, las condiciones en las que aparecieron ahí o cualquiera otra circunstancia que permita demostrar —al menos indirectamente— que se vulneró la ley electoral local. En ese sentido y derivado de las diligencias de investigación realizadas por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este Instituto quien actúa como autoridad sustanciadora, no se advierten medios de prueba que permitan acreditar

la utilización del financiamiento público para cuestiones diversas a las que les fue otorgado, por lo que se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida. Es cuanto presidenta, quedó a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

La consejera presidenta somete a consideración de todas y todos los integrantes del Consejo General el proyecto de resolución al que se refiere este punto del orden del día, por si alguien desea tener alguna intervención.

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero toma el uso de la voz a fin de realizar precisiones al proyecto de resolución al que se refiere este punto del orden del día, señalando que se omitió solicitar dos precisiones al proyecto de resolución, mi intervención tiene como finalidad únicamente hacer un par de precisiones.

En la página seis en el antecedente número diez se duplican dos párrafos, solicitaría la eliminación del tercer párrafo del antecedente número diez, esto es eliminar el último párrafo de la página seis y también se omitió precisar una fecha en el antecedente diecinueve respecto a la remisión del proyecto de resolución al Consejo General por parte de una servidora.

En la segunda línea del antecedente diecinueve dice oficio CQyD/025/2023 diagonal cero veinticinco, diagonal veintitrés signado por la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias el “X” de mayo, debe decir, el ocho de mayo por favor. Con esas dos precisiones presidenta, está a su consideración el proyecto de resolución.

El representante propietario del partido político de Morena en uso de la voz señala: Gracias consejera presidenta, nuevamente buenas tardes a los compañeros y compañeras que hoy estamos en esta sesión. Primeramente señalar ahí algunos errores de dedo, algunos ya los comentó la consejera compañera Beatriz, y mencionar que en la página cuatro en donde tenemos la fracción V, donde se señala requerimiento a la “Unidad Técnica de Fiscalización” en su renglón cuarto se señala la “Unidad Técnica Jurídica a solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización”, creo que está de más la “a” antes de solicitó y en la página cinco en la primer viñeta en el párrafo segundo dice: “Instituto Nacional Electora”, pues falta a la “l” para que diga “Electoral”.

En la página seis, es la distinción que hace la consejera Beatriz —en el entendido de que se duplica el párrafo penúltimo con el último—, sin embargo, yo solicitaría que se eliminara el penúltimo porque el penúltimo párrafo sí señala que la Unidad Técnica Jurídica justificó la ampliación de acuerdo a la redacción, y en el anterior no se señala quién justificó la ampliación del plazo. Creo que también lo comentó la consejera Beatriz, que en la página octava en la fracción XIX dice: “...remisión del proyecto de resolución...”, en el segundo renglón, —creo que ya hizo la corrección la compañera consejera— sin embargo, no se señala el año dice de “mayo” y obviamente es el presente, pero nada más para que se complemente en la redacción. Eso es en cuanto a los errores de forma.

En cuanto a la sustancia de cómo se llevó a cabo este procedimiento, a esta representación le llama mucho la atención la forma en que se sustancia, ya se había comentado en sesiones anteriores los tiempos y plazos que están muy desfasados para su resolución. Sin embargo, dentro de la misma substanciación señala que para efectos del principio de exhaustividad, solicita la ampliación del término para la investigación, sin embargo, la fecha de solicitud de la ampliación para la investigación, —obviamente debe de conllevar una justificación— sin embargo, los antecedentes de esta resolución no se mencionan cuál es la justificación, únicamente señala que para efectos de contar con más elementos.

Como no tengo otra manera de cotejar —por obvias razones de que debe de ser confidencial el procedimiento—, revisé el documento que presenta la Comisión de Quejas para efectos de seguimiento de los procedimientos, y me llevo con la sorpresa de que el procedimiento sancionador que en este momento se pretende aprobar no coincide con las fechas que nos presentan en el documento de la Comisión —para ser más exactos—, el que nos presentaron el veintiocho de abril.

Para efectos de mi manifestación, no coinciden las fechas, puesto que en el proyecto que se nos presenta se señala que se radicó en el documento que se nos presentó del procedimiento sancionador ordinario 05/2022-PSO-CG. Señala que la fecha de presentación fue el cuatro de octubre y su fecha de radicación fue el veintiuno de enero, sin embargo, en el proyecto —a menos de que alguien me corrija— se señala que la radicación fue el ocho de febrero del dos mil veintidós.

Entonces, ya no tengo una certeza de cuál sea lo correcto, porque reitero no tengo manera de cotejar con el expediente, sin embargo, se reitera en el proyecto dice ocho de febrero radicación del procedimiento ordinario y en el documento que nos presentaron para la sesión que mencioné anteriormente, señalan que la radicación fue el veintiuno de enero, pero no es la única fecha que no coincide sino que también la fecha que presentan en el presente proyecto para ampliar el plazo de investigación, es el seis de abril de dos mil veintidós.

Sin embargo, en el mismo documento que presentó en la sesión ordinaria la Comisión de la materia, señala que fue el veintitrés de marzo de dos mil veintidós cuando se ordenó ampliar el plazo para realizar la investigación.

También me llama mucho la atención a esta representación, que en el documento que se pretende aprobar en este momento solicitan la ampliación del término para investigación del seis de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, el seis de septiembre de dos mil veintidós se justificó la ampliación del plazo, entonces la ley electoral nos señala que son cuarenta días para llevar a cabo la investigación, y si la autoridad lo cree conveniente por alguna investigación que se encuentre pendiente, podrá solicitar una nueva ampliación dentro de un término igual.

Es decir, otros cuarenta días, pero hasta el seis de abril se solicita la ampliación del plazo y el seis de septiembre de dos mil veintidós se

justificó, entonces qué pasó de abril a septiembre para justificar la ampliación de ese término. Siguiendo revisando el documento que se nos presenta, no se atiende qué sucedió en esas fechas por eso mi preocupación la vez anterior, que manifestaba que con la síntesis que nos presentan de avance de los documentos —nosotros o al menos esta representación— no puede cotejar si efectivamente se está llevando una eficiente y eficaz agilización de los procedimientos y que no parezca que los procedimientos están guardados en el cajón, lo digo de manera muy respetuosa.

Es muchísimo trabajo con el que cuenta la autoridad —en este caso la Comisión—, para estarle dando seguimiento puntualmente a todos los procedimientos que se le presentan, máxime que estamos a la vuelta de un procedimiento o un proceso electoral que ya lo tenemos encima y que ya existen diversos procedimientos que se están instaurando. Yo sí veo la necesidad de que a esta representación puntualmente se le señale cuántos procedimientos existen, tanto especiales como ordinarios de principio a fin, en la etapa o en la síntesis que lo están presentando, pero de todos y cada uno de ellos no solamente del mes con mes que se va presentando, sino de la totalidad.

Porque pudiera ser que se me esté escapando alguno y esta manifestación se hace con el ánimo de sumar, de abonar y hubiese sido un buen ejercicio el que se nos hubiesen presentado el documento para la propuesta de modificación de la ley local, y yo creo que hubiéramos tenido aportaciones para que estos procedimientos no se atoraran tanto y fuéramos más eficaces —y hablo desde el punto de vista de las representaciones—. Es cuanto.

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, toma el uso de la voz, quien manifiesta lo siguiente: Recibimos con gusto las observaciones de forma que nos ha planteado el representante, las vamos a incorporar en el proyecto de resolución.

Respecto a las inquietudes en términos de los plazos, revisando en este momento el informe que fue presentado en el mes de abril ante este órgano colegiado, es importante destacar que los errores que vienen en las fechas efectivamente corresponden a errores del informe que vienen digamos es un reporte estadístico, en el informe presentado en el mes de abril efectivamente hay fechas plasmadas que no coinciden con el proyecto de resolución que hoy se presenta, quiero decirles que las fechas correctas son las que están en el proyecto de resolución que fueron tomadas del expediente que se encuentra en poder de la Unidad de la autoridad sustanciadora —que es la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral—.

Por lo cual representante, con gusto voy a transmitir la solicitud a la autoridad sustanciadora de que revise con mucha puntualidad el contenido de los informes y sobre todo si el error está haciendo en la captura de la información en el SIQD “Sistema Integral de Quejas y Denuncias” —que es de donde se obtiene la información para presentarlo—, me parece que entonces sí debemos reconocer que

tenemos por ahí quizá algún error de gestión en la información del sistema.

Habría que ver quién es la persona que está alimentando la información, en SIQD, para poder identificar esas inconsistencias y que no vuelvan a ocurrir. Esto por qué lo digo, porque me parece que es importante que tengamos certeza de que los datos correctos son los que obran en la resolución, porque la resolución deriva del expediente, eso es importante que tengamos la certeza de ello.

El otro es un informe estadístico del cual si se advierten errores habrá que corregirlos, eso sin duda alguna, y desde ahora le pido por favor a la autoridad sustanciadora, en este caso la Unidad Jurídica, que revise con mucha pulcritud la elaboración de estos informes y en su caso reitero, si los errores se encuentran en el sistema al momento del llenado también que se ponga más atención en ellos.

Ahora bien, respecto del tiempo que ha pasado o que pasó en la sustanciación de este procedimiento —como lo he dicho en otras ocasiones—, me toca dar respuesta por el trabajo que lleva a cabo la autoridad sustanciadora en este caso la Unidad Jurídica, —y me toca dar respuesta porque presido la Comisión a la cual se le presenta el proyecto de resolución—, la Comisión de Quejas que integramos dos consejeras y un consejero electoral. De igual manera que ante este Consejo General, se nos presenta un proyecto de resolución, sin embargo, nosotros como Comisión de Quejas y Denuncias no tenemos acceso a los expedientes, así como tampoco lo tiene este Consejo General.

A lo único que tenemos acceso es a los proyectos de resolución, una vez que se nos han notificado, porque somos autoridades distintas, la autoridad que sustancia es la Unidad Jurídica de este Instituto y la autoridad que resuelve con el proyecto que le presenta la Unidad Jurídica en primera instancia es la Comisión de Quejas, que después lo remite a Consejo General. Hecha esta aclaración, yo lo que podría yo decirle desde la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias es que lo que hemos advertido, en términos de los plazos y por qué más de un año pasó la autoridad sustanciadora en la revisión y emisión del proyecto de resolución de este expediente.

Primero decirle que la justificación de la ampliación de los plazos para las diligencias de investigación, se encuentran contenidas en el expediente, como usted bien lo advierte, en el proyecto de resolución en el apartado de antecedentes, únicamente va a encontrar un resumen de las actuaciones llevadas a cabo, no va a encontrar el contenido de las actuaciones porque reitero, los antecedentes son un resumen de ello. El contenido de las justificaciones de todas las actuaciones que obran por supuesto en el expediente, al cual solo tienen acceso las partes acreditadas en el mismo por supuesto.

Debo decirle que la solicitud de ampliación de plazos fue debidamente fundada y motivada por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso

Electoral y se encuentra dentro de las posibilidades de ampliación que prevé la ley.

Ahora bien, no omito por supuesto —y tiene usted razón en hacer mención—, del plazo tan extenso que nos llevamos o que se lleva la Unidad Técnica Jurídica en la resolución de estos expedientes. Obedece a varios factores y aquí reitero, me toca dar respuesta de estos factores en mi carácter de presidenta de la Comisión de Quejas, pero sí lo quiero aclarar, la Comisión no sustancia estos procedimientos, no somos responsables en la Comisión de todas las diligencias que se llevan a cabo, ni de los plazos.

Por supuesto si nos toca hacer digamos la presentación de los informes correspondientes, nos toca la labor de supervisión. En esa labor de supervisión debo decirle que la Unidad Técnica Jurídica tuvo que tomar determinaciones en función de priorizar a qué expedientes necesitaba ponerles digamos mayor celeridad. Debo comentarle que por ejemplo durante el año dos mil veintidós, en todo el año durante doce meses se recibieron un total de treinta y tres expedientes, de treinta y tres denuncias para procedimientos, por ejemplo, especiales sancionadores, estos sin contar los procedimientos ordinarios sancionadores. En lo que va del año ya llevamos prácticamente la misma cantidad.

Durante el año dos mil veintidós —que fue el año en el que la autoridad sustanciadora debió de haber llevado a cabo las diligencias de investigación—, porque la vista otorgada por el Instituto Nacional Electoral a esta autoridad fue hacia finales de dos mil veintiuno, fue hasta octubre de dos mil veintiuno que se nos plantea como autoridad la vista y se le instruye a la Unidad Jurídica a iniciar el procedimiento correspondiente.

Entonces las diligencias de investigación se llevan a cabo hasta el año dos mil veintidós. Esto porque de octubre a diciembre se solicitó al Instituto Nacional Electoral la remisión de copias certificadas de los dictámenes consolidados de los dictámenes de fiscalización, porque esto deriva de la labor de fiscalización que hace el Instituto Nacional Electoral, hasta que la autoridad sustanciadora tuvo los dictámenes consolidados en materia de fiscalización, se pudo llevar a cabo las diligencias de investigación, esto fue a inicios prácticamente del año dos mil veintidós.

Qué pasó en el año dos mil veintidós, se coincidió con la devolución de más de ochenta expedientes derivados de reposiciones de los procedimientos especiales sancionadores del Tribunal hacia este Instituto, por virtud de inadecuada sustanciación que se hizo en los consejos distritales y municipales.

De manera que por los plazos que son más reducidos en los procedimientos especiales sancionadores, por supuesto se le dio prioridad a la atención de los procedimientos especiales sancionadores, sin perder de vista que también hay plazos que atender en los procedimientos ordinarios sancionadores para evitar por supuesto la

caducidad, en la que este Instituto a través de la Unidad Jurídica cuidó no caer, es decir, se cuidó por supuesto de no caer en la caducidad.

De manera que los plazos se han atendido conforme a la ley, conforme a la norma, por supuesto, lo deseable sería resolver con mayor expeditéz estos procedimientos, sí coincido con usted. Si fueron presentadas o no propuestas de reforma al respecto ante la autoridad legislativa; aquí más bien yo quisiera a usted preguntarle si tuviera alguna propuesta específica, que en vías de modificación legislativa pudiera mitigar, disminuir o evitar el número o la cantidad de quejas y denuncias, porque habrá que empezar también por decir que la cantidad de procedimientos que debemos resolver —sean sancionadores ordinarios o sean especiales sancionadores—, está directamente ligado a la cantidad de quejas y denuncias que nos llegan por parte de partidos políticos, ciudadanas y ciudadanos y actores políticos, que se sienten violentados en sus derechos.

De manera que ahí, este Instituto no tendría una propuesta para evitar que lleguen quejas y denuncias, todo lo contrario, este Instituto debe recibir absolutamente todas las quejas y denuncias mientras por supuesto se determinan derivado de las investigaciones y son procedentes o no, debemos admitirlas todas aquellas que pues se presenten. En ese sentido, esa es la razón por la que en materia de quejas y denuncias este Instituto no tiene alguna propuesta específica de modificación legislativa.

Sin embargo, por supuesto con la total apertura al diálogo abrimos el espacio por si alguna representación de algún partido político tuviera alguna propuesta que quisiera hacer llegar a este Instituto, y que quizá por conducto de este Instituto pudiéramos remitirla al Congreso del Estado y estar en tiempo de revisarla. Sería quizá en otro momento en alguna reunión de trabajo adicional que pudiéramos tener —toda vez que la materia de esta sesión debe versar sobre el procedimiento que está a su consideración—. Sería cuanto presidenta, muchas gracias.

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, toma el uso de la voz, manifestando lo siguiente: Buenas tardes, gracias presidenta. Únicamente quiero hacer mención —como integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto—, que en relación con la demora en el trámite de los procedimientos sancionadores —ya sea de índole especial u ordinaria—, ya he manifestado en algunas otras ocasiones mi inconformidad respecto de la demora en el trámite o sustanciación de estos procedimientos.

Lo hago también ahora en Consejo General, porque estimo que es importante dejar constancia —en mi carácter de consejera—, de que no comparto la forma en la que se vienen tramitando todos estos procedimientos.

Si bien es cierto, yo no formo parte de la autoridad sustanciadora, me corresponde a mí supervisar el trámite que realiza la Unidad, y en ese sentido —representante de Morena— en este caso como de tantos otros casos más, he señalado que es importante cumplir con una

investigación de manera eficiente, efectiva y sobre todo breve, que seamos muy concisos en la información que se está recabando en esta investigación que lleva a cabo la Unidad Jurídica de este Instituto.

En ese sentido, quiero compartirle a usted y al resto de representaciones de partidos políticos que en la sesión donde se discutió este tema —en la Comisión de Quejas y Denuncias—, fui enfática en señalar algunos aspectos que, desde mi punto de vista, la Unidad no está asumiendo y no está cumpliendo de manera exhaustiva con su obligación, y sobre todo insisto en tramitar estos procedimientos a la brevedad posible.

Quiero comentarle también representante, que yo hice constar en el acta correspondiente un extrañamiento de carácter verbal para que quedara constancia en el acta de que se trata, a efecto de poder ir registrando estos casos en los que yo estoy advirtiéndole que hay una demora injustificada —más allá de que la Unidad Jurídica motive y fundamente en los expedientes de que se trata—, la necesidad de ampliar los plazos para la investigación de qué se trata. Creo que es importante también que nos ajustemos a la realidad, no es únicamente esta motivación, en el sentido de que se hace necesario generar más diligencias de investigación por la corroboración de algunos hechos, sino que es necesario en todo caso que se puntualicen de manera muy concreta por qué es necesaria esta ampliación.

En ese sentido representante, hice constancia en el acta de que se trata, dejé constancia sobre estas manifestaciones que estoy haciendo, también realicé este extrañamiento de carácter verbal a efecto de que el titular de la Unidad pueda replicar esta información con quienes integran la Unidad Jurídica.

Yo hago un símil nada más una comparación, quienes se dedican a cuestiones jurídicas —particularmente litigiosas—, se dan cuenta que los juzgados en nuestro país están llenos de expedientes que diariamente se presentan estos asuntos concretos, y diariamente también se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

En ese sentido, desde mi punto de vista, que haya una cantidad determinada de asuntos que se inician o que están en trámite no debería de ser obstáculo para que se imparta justicia en tiempo y forma para que las personas que están denunciando y las que están denunciadas, puedan acceder de manera pronta a la justicia, que eso es lo que nos debería de corresponder como autoridades.

Yo no comparto, y sí quiero ser enfática y dejarlo claro en esta sesión del Consejo General, que exista una carga excesiva de trabajo desde mi punto de vista diariamente se tienen que hacer diligencias de investigación preliminar en cada uno de estos expedientes e impulsarlos a buen término para que podamos justamente cumplir con nuestra obligación como órgano de dirección, como Consejo General, de poder estar aprobando o no los proyectos de resolución que se nos pongan a nuestra consideración.

Con base en lo anterior, pues dejo también muy preciso que a pesar de estos inconvenientes que yo he visto en el trámite por la demora por la que realiza la unidad estas investigaciones, comparto y adelanto, en ese sentido, en este punto, comparto el sentido en el que se resuelve este proyecto de resolución, sin embargo, no omito también ahora en sesión del Consejo General, hacer énfasis en que la Unidad Jurídica tiene que eficientar el trabajo que viene realizando y en consecuencia se tienen que buscar los mejores perfiles para realizar este trabajo tan de suma importancia que resulta para el Instituto.

No es la primera ocasión que se hace mención a ello en estas sesiones del Consejo General y tampoco es la única ocasión en que la de la voz ha manifestado esta preocupación, ha hecho estos extrañamientos en sesiones de la Comisión de Quejas y Denuncias pues que están a su consideración son documentos públicos pueden ser consultados y se dan cuenta pues de la serie de razones que ahí se vierten a efecto de poder supervisar de manera adecuada la tramitación de estos procedimientos, pero también orientar a que la Unidad Jurídica haga un mejor trabajo. Es cuanto. Muchas gracias.

La consejera electoral María Concepción Esther Aboites Sámano, toma el uso de la voz, manifestando lo siguiente: Gracias consejera presidenta.

Nada más sobre el tema quiero comentar, que esto de la dilación en los procedimientos sancionadores, es algo que ya viene arrastrándose, no de ahora, sino desde el año dos mil veintiuno que concluyó el proceso electoral, yo hice una manifestación de la cantidad de documentos de expedientes que todavía estaban en trámite, los que nos dejaron quienes fungieron en su momento como consejeras y consejeros electorales, hice una petición en la cual no tuvo el acompañamiento.

Se comprometió un compromiso de entregar unos informes, los cuales creo que todavía están pendientes, entonces, creo que sí es importante señalar que esta dilación no es de ahora, no es reciente, sino que viene arrastrándose ya de tiempo y creo que habría que ir al fondo de eso, irnos al año 2020-2021, que fue donde se generaron todos estos expedientes y a partir de ahí, actuar en consecuencia. Gracias

La consejera presidenta, retoma el uso de la voz, solicita que le pongan el cronómetro y manifiesta lo siguiente: Quisiera hacer algunos comentarios respecto del trabajo que realiza la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral.

Especialmente en este año se han dado impulso a los procedimientos que han venido llegando, estamos conscientes de que precisamente desde el proceso electoral pasado que es 2020-2021, se recibieron una cantidad importante de procedimientos alrededor de setecientos procedimientos especiales sancionadores, que fueron en su primer el lugar, atendidos por consejos municipales y distritales.

En un segundo momento, los expedientes que aún quedaban en trámite se remitieron a través de un acuerdo del Consejo General para que su

sustanciación fuera a través de las Juntas Ejecutivas Regionales, todavía encontrándonos en proceso electoral, una vez que concluye el proceso electoral estos expedientes —esta cantidad que era originalmente pensada— atendiéndose por sesenta y ocho consejos municipales y distritales en los que en algunos municipios hubo una cantidad mucho mayor de la que se pudiera esperar, fueron finalmente recayendo en la Unidad Técnica Jurídica.

Entonces estamos hablando de un universo de sesenta y ocho consejos municipales y distritales atendiendo alrededor de setecientos procedimientos y luego se reduce el universo a quince Juntas Ejecutivas Regionales y finalmente repercuten cuando culmina el proceso electoral en la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral con el personal normal que cuenta la Unidad Jurídica.

De esto tenemos que tomar en cuenta, que los procedimientos requieren su atención específica, cada uno de ellos, conforme fueron saliendo en la Unidad Técnica Jurídica, se recibieron alrededor de ochenta reposiciones, entonces viendo el universo de asuntos que tiene que atenderse por la unidad con el personal que permanentemente tiene apostado la unidad, pues la carga de trabajo fue exponencial.

Esto no lo podemos negar en ninguna circunstancia, la atención que se ha venido dando para solventar este rezago, ha sido ha implicado un trabajo importante del personal adscrito a la Unidad Técnica y desde ese entonces han pasado tres presidencias de la comisión de quejas, que como bien lo comentaba la consejera Beatriz, la comisión de quejas está encargada de darle seguimiento a los procedimientos que atiende la Unidad Técnica Jurídica como unidad sustanciadora.

Finalmente quisiera resaltar que se fueron dando avances importantes y este último año, en primera se han recibido en dos mil veintidós números de quejas además de las que ya se venían rezagadas en dos mil veintitrés, ahora ya estamos a esta fecha con treinta y cuatro nuevas quejas más las que se traían.

Lo cierto es que de dos mil veintiuno la unidad ya prácticamente tiene un dígito de expedientes ahorita —sino que me apoyen con el dato— pero es un dígito nada más de expedientes menos de diez expedientes pendientes de 2020-2021, estamos conscientes que no es lo ideal pero lo cierto, es que se ha tenido un avance importante en la tramitación de estos procedimientos que estaban pendientes en el año dos mil veintidós fueron enviados al Tribunal Electoral sesenta y nueve expedientes.

Estamos hablando de un avance muy importante y ahora en el año dos mil veintitrés, —fíjense bien, todavía no tenemos ni siquiera medio año— y ya se llevan treinta y cuatro expedientes enviados a corte del diecisiete de mayo, entonces finalmente el trabajo no deja de irse acumulando, pero yo estoy segura y consciente que el trabajo que ha venido desarrollando la Unidad Técnica Jurídica contra las posibilidades materiales que tiene, ha sido un trabajo eficiente y particularmente este año han salido muchos expedientes ya remitidos al Tribunal, para que

el Tribunal finalmente determine si sanciona o no sanciona, así determina responsabilidad o no determina responsabilidad.

En este sentido, a mí me parece que se han dado buenos resultados numéricamente hablando. Ahí están los reportes, ahí están las estadísticas y se ha incluso fortalecido a la unidad con mayor personal que no ha sido suficiente, pero ahorita sigue llegando —conforme a nuestra presupuestación— personal de apoyo precisamente previendo esta avalancha de procedimientos que se pueden con motivo de las múltiples denuncias que van a empezar a llegar derivadas del inicio o la cercanía del proceso electoral.

En este sentido, yo estoy convencida de que la Unidad Técnica Jurídica, si bien tiene áreas de oportunidad y áreas de mejora, ha estado trabajando a la altura que necesita el Instituto, se puede mejorar por supuesto. Y en eso se sigue trabajando, ya con el apoyo de mayor personal para la atención de la cantidad de denuncias que seguramente van a seguir llegando.

Entonces en este sentido, solamente ya en dos mil veintitrés tenemos treinta y dos expedientes que han llegado, cuando en todo dos mil veintidós si solamente se recibieron treinta y tres expedientes.

Esto nos puede ir enfocando al trabajo tan importante que se espera que caiga en la Unidad Técnica Jurídica como unidad sustanciadora y aquí pues sí quisiera destacar que el trabajo se ha avanzado los resultados en números ahí están, por supuesto que hay interpretaciones o incluso criterios jurídicos que pudieran ser controvertidos, pero así está diseñado el sistema, para que si no estamos de acuerdo con alguna determinación, están los medios de impugnación correspondientes, para que sigan esta cadena impugnativa.

Finalmente nos van dando luz acerca de cómo visualizamos el desarrollo del proceso electoral, entonces las determinaciones que hoy en día la Unidad Técnica Jurídica como autoridad sustanciadora tome antes de que empiece el proceso electoral, nos van dando una ventaja y que son impugnadas nos dan dando una guía de cuáles son las determinaciones en las que podemos proceder de cierta manera y cuales probablemente van a ser controvertidas, no entonces creo que todo abona a un mayor y un mejor desarrollo del proceso electoral 2023-2024, que como ya lo he mencionado, en muchas ocasiones se vislumbra como un proceso de por sí complejo por el contexto político en el que nos encontramos en el país en muchas aristas.

Creo que todo el desempeño que se ha tenido por parte de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, es un trabajo que se ha venido demostrando numéricamente, se va avanzando de manera importante y aparte con estas medios de impugnación que se tramitan ante los tribunales, vamos formando criterios que nos sirven para que en proceso electoral las determinaciones sepamos cuál es el criterio que asumiría el Tribunal, de manera que no tengamos ya tantas impugnaciones o en todo caso que no revoquen estas determinaciones.

Insisto todo abona a la construcción de un mejor escenario jurídico en materia de quejas y denuncias para el proceso electoral 2023-2024, este es mi comentario y si quisiera dejar claro que en el caso de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, los avances han sido importantes en este año. Hasta aquí mi intervención.

La secretaría ejecutiva toma el uso de la voz para hacer constar que el representante propietario del Partido Acción Nacional se incorporó a esta sesión a las doce horas con treinta y dos minutos.

En uso de la voz, el consejero electoral Luis Gabriel Mota refiere: En el caso del proyecto que está a discusión estoy de acuerdo con el sentido del voto, pero ante alusiones personales me veo en la necesidad de intervenir; yo presidí la Comisión de Quejas al igual que la consejera Sandra y que ahora preside la consejera Beatriz. Como ellas ya lo explicaron, nosotros no sustanciamos ningún procedimiento ni tenemos acceso a los expedientes nos toca supervisar, pero tampoco somos capataces para estar detrás de las áreas para que hagan su trabajo.

El trabajo de la Unidad Técnica Jurídica pasa por varios problemas —y no lo digo yo—, lo dice también el Tribunal en varias de sus sentencias donde nos ha llamado la atención, incluso ha ordenado a la Comisión de Quejas que hagamos algo para que se hagan cursos de capacitación —cosa que ya se hizo desde hace dos años—. Bajo esa situación, la Unidad Técnica Jurídica sí tiene problemática estructural y como dijo la consejera Conchita esto no es de hoy, no es de ayer, es de años.

Recordemos que ha habido cambios en su titular y que ha habido cambios al interior de la propia dirección, entonces se nos han ido quienes sustanciaban; si nos comparamos por ejemplo con San Luis Potosí que tiene dos sustanciadores y que no tiene ningún procedimiento especial sancionador, ni mucho menos ordinario en fila, entonces estamos hablando también de que pudiéramos tener mejores niveles de calidad. Decía usted presidenta, que es el tamaño el nivel que merece el Instituto, yo creo que no, yo creo que merece más y en la Unidad Técnica Jurídica sí tenemos que hacer —nosotros como colegiado—, algo para ayudar a esa unidad, es decir, cómo fortalecerla.

Tan lo hemos hecho que le hemos propuesto —al menos yo antes de terminar la presidencia—, le envíe un oficio donde le manifiesto que estamos en la disposición para encontrar los mejores canales y ayudar a que esa Unidad tenga perfiles, tenga lugares o que podamos resolver la problemática. Le hemos autorizado mayor personal a la Unidad Técnica Jurídica para que logre enfrentar los problemas, pero también hay que también decirlo, el Tribunal con sus criterios nos ha regresado más de un procedimiento.

Por lo tanto regresa de nuevo la Unidad Técnica Jurídica para que lo vuelva a sustanciar, es decir, un trabajo se convierte en dos porque lo regresan a sustanciarlo y hacer nuevas diligencias, es decir, que es un círculo que no hemos logrado romper pero que este Consejo tiene que hacer algo, motivar algo, que suceda estructuralmente para que tengamos mejores resultados y ahora sí con miras a eficientar más el

trabajo que realiza esta Unidad Técnica Jurídica y que la Comisión — que una de sus atribuciones es la de supervisar no sustanciar—, pueda ir de la mano con la Unidad Técnica Jurídica. Es cuanto consejera presidenta, quedó a la orden.

El representante propietario de Movimiento Ciudadano menciona: Hola cómo están, buenas tardes. Otra vez gracias por el uso de la voz voy a tratar de ser muy breve, creo que nadie está obligado a lo imposible y coincido en que hay una falla estructural en el diseño de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral.

A nombre de Movimiento Ciudadano, nosotros hemos tenido acercamientos tanto con la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano con el licenciado Rodrigo como con nuestra representante en el Congreso la diputada Dessire Ángel Rocha, y más allá de las críticas y de los señalamientos para las personas que son titulares de las áreas, nosotros al detectar esta problemática tenemos una postura que esperemos se discuta en el Congreso —que esa no es una cancha de aquí—.

Justamente el día de ayer —mi intervención en la mesa de partidos políticos—, hacía el señalamiento de que lo que no se atiende allá en el Congreso del Estado repercute aquí en el Consejo General y luego vienen quejas de que este Consejo General asume sobre regulaciones y asume funciones de facto de legisladora cuando no le correspondería, pero también es una falla institucional ahí que no depende incluso de este Consejo. Igual ustedes ayer estuvieron allá discutiendo problemáticas que atañen, y nosotros la postura que tenemos, la solución es que se debe de dividir las funciones de la Unidad.

Tiene que haber un área específica que lleve a cabo todo lo jurídico y otra parte que lleve todo lo contencioso electoral, porque además la dilación no solamente es aquí. Nosotros somos promoventes a nombre de una compañera sobre un PES de violencia política en razón de género que fue remitido desde hace más de dos meses casi ya al Tribunal y tampoco han resuelto allá, la dilación no es exclusivamente de aquí del Consejo General o en particular de la sustanciación o de la Comisión de Quejas y Denuncias, sino que más bien es una falla estructural.

Nosotros nos ponemos a disposición en lo que podamos ayudar porque somos afectadas todas las personas, pero también estamos nosotros como partido político en la disposición de ayudar, más allá de señalar —que creo que he escuchado muchas veces este mismo escenario—, y no solamente como lo dicen ahora sino en diversas ocasiones que me ha tocado ser representante ante este órgano colegiado, siempre es el mismo señalamiento respecto a las dilaciones que hay.

Entonces es un problema que no se le puede adjudicar a los titulares de las Comisiones de Quejas y Denuncias, tampoco yo considero que sea un tema que se le tenga que adjudicar de manera personal a quienes han sido titulares de la Unidad Técnica, pero sí creo que nos corresponde a todos y todas plantear rutas que mejoren esto porque sí,

lo que ya no estaría permitido acontecer es que estuviéramos frente a una inacción y que estos problemas se siguieran suscitando independientemente de la integración de los órganos o de quienes son titulares de las áreas institucionales que están a cargo de sacar adelante estos procedimientos sancionadores. Es cuanto.

En intervención, el representante propietario del Partido Acción Nacional señala lo siguiente: Muchas gracias, muy buenas tardes. Escuchando los comentarios en esta sesión, sí me gustaría hacer una reflexión en torno a lo que he escuchado.

El procedimiento especial sancionador no necesita mayor intervención, innovación o investigación para irlo perfeccionando puesto que lo que ya establece la ley electoral es muy claro, si estamos revisando o estamos actuando sobre experiencias o actuaciones que esperemos que resuelva el Tribunal, nunca vamos a alcanzar a hacer un manual completo para poder resolver y ya estaríamos extralimitándonos de las funciones de la Unidad Técnica.

Nosotros hemos observado o hemos resentido —más que otra cosa—, esta serie de procedimientos que se han estado implementando por la Unidad Técnica, me refiero específicamente sobre todo a requerimientos innecesarios, por ejemplo, hay hechos que son públicos y notorios —que son evidentes—, sin embargo, se hacen requerimientos para poderlos confirmar. Entonces estamos redundando, estamos trabajando alrededor de experimentos que yo creo que son innecesarios en la materia jurídica, es una materia exacta.

Tenemos en nuestra ley local una serie de articulados —son muy pocos—, como para poder tener una complejidad; recordemos otras materias, tienen códigos completos para realizar procedimientos y no es el caso en esta materia. Es un procedimiento que debe ser sumario y yo creo que aquí una de las cuestiones que más nos han impactado en el proceso en cuanto a retrasos, es esa parte que se está innovando, se están buscando tomar criterios y a veces me parece que se mezcla la función administrativa de investigación con la función jurisdiccional, como si quisiéramos anticiparnos a una resolución.

En otras materias de derecho —los que son abogados lo compartirán— el principio de congruencia implica que no se esté variando la litis, hemos visto algunas pues resoluciones del Tribunal en donde regresan los procedimientos para volverlos a investigar, pero es en razón de que se amplían las vías de investigación a actores que ni siquiera a veces están en las denuncias y luego ya no se les cita, se dejan inconclusos y se regresan otra vez a estudiarlo porque se amplió la investigación de manera innecesaria; yo apelaría al principio de congruencia que rige la materia del derecho, que implica que sobre lo que está en la denuncia tenemos que realizar nuestra investigación y ahora sí que coloquialmente lo digo —no jugarle ya el explorador en esta materia—.

Lo que demandamos no es un procedimiento, lo que demandamos los partidos políticos es justicia, que se revisen las actuaciones, que se analicen al tamiz de la ley electoral y se inhiban estas conductas o se

dejen de realizar, que afectan sobre toda la democracia. Lo que es la construcción de algún manual o la experiencia que puedan adquirir nuestros funcionarios públicos —yo creo que la dejamos a los cursos de capacitación que tiene que tener el Instituto—, y que cuyo recurso también se debe de invertir en esto.

En este sentido si quiero ser muy claro, respetemos las reglas del proceso electoral simplemente ahí está en la ley, no hay nada más que innovar y es lo que hemos visto en algunos requerimientos que nos han hecho —incluso como partido—, que si no sorprende. Preguntas que son inculinatorias, que violan el principio de presunción de inocencia y que a final de cuentas esto se va a caer en el Tribunal.

Entonces siento que nada más es una cuestión de técnica, de situarnos, de poner los pies en la tierra y de saber cuál es la función de investigación que tiene que tener ese Instituto a través de su Unidad Técnica y para adelante y no encallarnos en dilaciones procesales, por ejemplo, hace poco en una audiencia nosotros explicábamos o exponíamos como partido los lapsos innecesarios entre las investigaciones, a veces la investigación no va de corrido, sino que a veces se detienen en ciertos lapsos y no están justificados, son ilegales, no interrumpe la prescripción; no son lapsos que sean legales o que se justifiquen.

Entonces hay interrupciones innecesarias de la investigación que no están justificados en los expedientes suficientes para hacer que los asuntos prescriban, recordemos que estos asuntos que estamos revisando aquí son asuntos que en su mayoría devienen del proceso electoral pasado, entonces cuál sería la utilidad práctica en la actualidad de la resolución ya de estos procedimientos, y ahora esto lo digo con miras al próximo proceso electoral. Es cuanto presidenta.

En uso de la voz, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional menciona: Sí, gracias presidenta consejera por el uso de la voz y nuevamente saludar a las consejeras a los consejeros, a los representantes de los partidos políticos que conformamos este Consejo General y a la ciudadanía en general.

Muy breve y concreto, yo creo que es muy fácil descalificar, más bien hay que construir y hay que seguir una ruta; yo coincido a favor. Desde luego no es una situación sencilla el atender una serie de expedientes y queremos desde luego que todo salga de una manera pronta, expedita y apegada desde luego jurídicamente a lo que marca y norma nuestras leyes electorales, coincido con muchos de los comentarios que —todo a favor—, de que si se va a hacer un cuestionamiento, también se tenga la forma en la cuál sería la ruta adecuada o cuál sería la propuesta para sumar a este Consejo General, y desde luego llevarlo a cabo en la práctica.

Es muy fácil solamente señalar, pero también debemos nosotros dar las soluciones y desde luego sumarnos siempre a fortalecer todas las actividades y las acciones que se realizan dentro de esta Comisión que atañe y desde luego al Consejo General y todas las atribuciones que

conlleve el Instituto. Muy breve, muy concreto este es mi comentario como representante del Partido Revolucionario Institucional, un llamado a construir y a que busquemos la ruta en lugar de la descalificación —que eso nada nos abona—, y desde luego creo que hay muchas acciones en las cuales ya hay una gran experiencia al interior del Instituto, se están retomando y eso lo hemos visto el rumbo de cómo se llevó el proceso y la sustanciación de algunos expedientes de dos mil veintiuno a la fecha.

Entonces creo que debemos también nosotros ser congruentes con lo que decimos y con lo que actuamos. En ese tenor y en ese sentido, no quiero extenderme más para no ser reiterativo, pues construir y —reitero lo que mencionaban algunos de los representantes que me antecedieron en el uso de la voz—, vamos sumando y no descalificando.

También para buscar jurídicamente que, si hay una propuesta, se lleve a cabo al Congreso del Estado para hacer su modificación legal y vayamos llevando a cabo los apoyos correspondientes hacia los grupos parlamentarios como la reunión de ayer que se llevó a cabo. Es cuando presidenta consejera, muchísimas gracias por el uso de la voz, y a mis demás compañeros y compañeras, gracias.

La consejera presidenta en uso de la voz abre segunda ronda de intervenciones.

El representante propietario del partido político de Morena en su intervención señala lo siguiente: Gracias consejera presidenta, nuevamente buenas tardes y mi intervención nada más es para contestar algunas manifestaciones que se han generado en este espacio.

Comenzando con la consejera Beatriz, a mí sí se me hace grave que nos presenten fechas con error porque nosotros no tenemos otro documento con que cotejar, y si ustedes nos presentan estas fechas, a lo mejor estamos desgastándonos de okis, porque yo estoy hablando de una fecha que está en el documento que se presenta cuando al momento de aprobar un procedimiento viene otra fecha. Entonces si se me hace grave y no comparto la manifestación donde señala que usted es a quien le toca presentar este tipo de documentos y que es el titular de la Unidad Técnica Jurídica quien sustancia tales procedimientos y creo entender que participa en la presentación de estos documentos.

Se me hace demasiado grave este señalamiento, que me gustaría que trajeran al titular de la Unidad Técnica —no sé cuánto tiempo tenga—, pero que nos muestre un real reporte o la síntesis —como lo vienen presentando—, para nosotros darnos una idea de los plazos y tiempos. No necesitamos legislar, me preguntaba la consejera Beatriz que, si yo tenía una propuesta, lo que ocupamos es respetar las reglas del juego que están en los procedimientos.

Es necesario preguntarse qué pasó de una fecha de presentación a otra cuando hay un vacío entre una fecha y otra, es normal hacer esta

pregunta. Por ahí escuché otra compañera —la consejera Conchita—, que esto ya nos trae tiempo con esta misma problemática, entonces varias veces más de un consejero me ha dicho a mí o me ha recalcado, hay representaciones nuevas, ustedes van conociendo del tema ya se hicieron más mesas de trabajo.

Entonces si en este tema ya también se hicieron varias manifestaciones desde el dos mil veintiuno, dos mil veintidós, estamos en el dos mil veintitrés y no se ha dado un resultado, no obstante a que ya hicimos varias modificaciones —como lo dijo el compañero consejero Luis Mota—, entonces tenemos que ejercitar otras acciones porque hay temas de violencia política en contra de la mujer que se presentaron antes del proceso electoral 2020-2021 o dentro de él y estamos en dos mil veintitrés y no se les ha dado o no se les ha solucionado su problema.

Entonces aquí acudieron a una autoridad electoral, máxime que fue dentro de un procedimiento especial, yo este comentario lo comencé porque dentro del proyecto que se pretende aprobar señalan que ejercían el principio de exhaustividad, pero yo no vi en ninguna actuación, en un antecedente o ninguna fecha de la síntesis del documento de la Comisión, que realmente hubiera un motivo para alargar o solicitar una ampliación, tanto en la investigación como la ampliación de la resolución del proyecto o de la presentación del proyecto.

Es importante ver el problema, es importante presentar soluciones —pero las soluciones tienen que ser a través de ustedes consejeros—, no puede llegar hasta una sesión del Consejo General es esta problemática y menos que todos los consejeros no hayan detectado estas anomalías, porque reitero, no tengo yo contra qué cotejar más que contra los proyectos que están presentando. Entonces si es de consideración, si es grave y lo dejo en la mesa, muchas gracias.

En uso de la voz, la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero refiere: Gracias presidenta, yo quisiera primero empezar por hacer una precisión. Creo que es claro que la discusión que estamos teniendo no tiene que ver estrictamente con el sentido de la resolución, no tiene que ver la discusión que estamos teniendo propiamente con las determinaciones —creo que eso de entrada hay que aclararlo—.

La discusión que hoy estamos teniendo —que por supuesto es válida— es admisible, es entendible —porque ahí está la realidad y no se puede negar—, es respecto a los plazos que la autoridad sustanciadora —en este caso la Unidad Jurídica—, está usando para resolver digamos o tramitar los expedientes, ya sea por la vía del ordinario o por la vía del especial; creo que eso es importante decirlo y esto por qué lo quiero aclarar; creo que más allá de deslindar o no responsabilidades, que también de pronto en ese deslinde de responsabilidades habría que hacer una evaluación muy clara de cómo se sustanciaron los procedimientos y cuántos procedimientos se remitieron al Tribunal en dos mil veinte, en dos mil veintiuno, en dos mil veintidós y en dos mil

veintitrés y los números hablarán por sí solos —pero me parece que eso es materia quizá de otra sesión o de otro tema—.

Lo que coincido totalmente con el representante del PAN, con el representante de Morena, también con Movimiento Ciudadano, con el PRI —prácticamente con todos los partidos políticos—, es que este es un problema de carácter institucional, este es un problema del Instituto y como Instituto debemos resolverlo y tiene razón el representante de Morena, qué desafortunado que tengamos que venir a una sesión de Consejo General a tener que expresar si estamos o no de acuerdo con determinada actuación de un área técnica. Me parece que al interior debemos mostrar la capacidad como órgano colegiado de poder asumir determinaciones y actuar en consecuencia.

Hasta donde a mí me alcanza en mis atribuciones individuales como consejera electoral, yo quiero decirles que he emprendido acciones para llevar a cabo la supervisión de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores. Esto, quiero también aclararle al representante de Morena, yo tampoco tengo acceso a los expedientes —porque él dice, es que yo no tengo con qué cotejar lo que hay, lo que obra en el informe—.

Quiero decirle que yo como autoridad en el tema de la Comisión de Quejas y Denuncias, no estoy autorizada tampoco a conocer los expedientes. De manera que el mismo informe estadístico que usted conoce es el mismo que yo conozco, y yo no tengo autorización —y quien lo haga esta fuera de la norma—, yo no tengo autorización.

La ley no me lo permite para pedirle a la autoridad sustanciadora que me exhiba los expedientes antes de los proyectos de resolución. De manera que es hasta este momento que yo conozco igual que usted los proyectos de resolución y por ende pudiera tener acceso en todo caso, a los expedientes.

Por supuesto que se deben corregir los informes estadísticos, ya explicaba en mi intervención anterior cuáles serían las acciones que habría que emprenderse para hacer esos ajustes en los informes estadísticos que obran en el sistema, reitero, ahí tenemos un problema, no lo estoy negando. Es un problema institucional, que como Instituto lo debemos atender.

Ahora bien, escuché también que hay algunas inconformidades respecto a algunos requerimientos, trámites o formas en que la autoridad sustanciadora ha actuado, yo invito a las representaciones de partidos políticos a que, si hay evidencia clara de una actuación inadecuada de la autoridad sustanciadora, les invito a interponer las denuncias correspondientes, porque lo que se queda digamos dicho en las palabras, en las sesiones, de pronto nosotros no tenemos la evidencia para corroborarlo. Si hay una evidencia que tengan con toda claridad de que hay una actuación inadecuada, por supuesto les invito a interponer las denuncias correspondientes.

También —porque creo que es importante señalarlo—, se habla de seguir las reglas del juego, eso también —quiero decirlo—, me parece a mí una afirmación grave, porque creo que las reglas del juego se están siguiendo, si no se siguieran entonces estaríamos ante una inadecuada resolución, una inadecuada dictaminación, o una inadecuada sustanciación. Si de parte de este Consejo General o hacia la Comisión de Quejas y Denuncias de la que formo parte y presido se advierte una inadecuada o que no se atiende en las reglas del juego en los mismos términos, les invito a presentar las denuncias correspondientes.

Me parece que como Comisión se ha hecho lo que corresponde, es cuanto presidenta gracias.

La consejera presidenta en uso en la voz manifiesta lo siguiente: Nada más quisiera concluir con el tema —centrándonos al punto que nos ocupa en este momento—, como hay criterios jurisprudenciales en el caso de que los procedimientos sancionadores ordinarios tienen hasta dos años para caducar. En este sentido, solamente quiero reiterar que las actuaciones de la Unidad Técnica Jurídica en el procedimiento que nos ocupa están apegadas a derecho, si bien existió una dilación como ya aquí lo manifestaron, las razones han sido justificadas.

En primer lugar, cómo se pidió información al INE —tardan en mandarla— y ahí viene el punto específico en el proyecto de resolución —no sé la información que finalmente remite el INE consta de más de tres mil fojas—, y pues todo esto requiere un análisis exhaustivo por parte de la Unidad Técnica Jurídica. En este sentido, abonando al comentario que hace la consejera Beatriz, en el caso de que haya alguna actuación que se considera inadecuada por parte de las partes que están involucradas, tenemos un sistema construido en el sentido que se impugnan los actos de autoridad y entonces se va corrigiendo a través de este mismo sistema.

Entonces creo que en el caso que nos ocupa en este proyecto de resolución, si bien hay alguna discrepancia con los datos que bien nos hace notar el licenciado Luis Barbosa representante de Morena, en este sentido únicamente con el compromiso por parte tanto de la Unidad Técnica como de este Consejo General de perfeccionar el dato estadístico que se maneja en el informe que, al momento de ser a veces voluminoso, pudo haber ahí alguna confusión en las fechas.

Finalmente con lo que se resuelve es contra constancias, contra el expediente y estas fechas están cotejadas con el expediente, no resolvemos conforme a los informes, aunque comparto que haya aquí alguna inconformidad por el hecho de que no coincidan estas fechas, para lo cual pondremos más cuidado en el desarrollo de estos informes que se rinden al Consejo General, pero que no vinculan en manera alguna al resultado de la resolución, porque en la resolución se toman en cuenta los datos plasmados en cada uno de los expedientes —que como bien lo han comentado aquí consejeras y consejeros—, no conocemos hasta que no son mandados ya sea dependiendo del tipo de procedimiento por la propia Unidad Técnica a la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva, que es en el

momento en el que nos podemos imponer de los expedientes el resto de consejeras y consejeros, a través de mi conducto se les remite también a consejeras y consejeros que no son parte de la Comisión.

Tiene su procedimiento específico, tiene su razón de ser conforme están las reglas marcadas en la legislación. En este sentido, nada más quisiera ahora sí puntualizar que las actuaciones de este Instituto se hacen conforme a derecho y conforme a las reglas que están establecidas en la propia ley electoral, con el compromiso —aquí como lo manifestó la consejera Beatriz como presidenta de la Comisión de Quejas—, de mejorar en estos puntos en donde se ha informado alguna fecha incorrecta, simplemente verificarlo —porque como tiene usted razón—, no está bien que este un dato ahí equivocado, pero los errores a veces estamos sujetos a ellos y se cometen pero este no tiene mayor trascendencia, porque finalmente la resolución va contra constancias en el expediente.

Hasta aquí sería mi comentario respecto del punto que estamos abordando —porque efectivamente la discusión fue fuera del punto—, y conforme al reglamento que tenemos para las sesiones de los órganos colegiados la discusión debería de centrarse en el punto de que se trata en esta sesión, que es del contenido, del sentido del procedimiento sancionador ordinario que estamos resolviendo.

En intervención, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León señala: Muchas gracias, en esta intervención quiero hacer una aclaración para integrantes de este consejo y de igual forma para quienes son partes en los expedientes que nos toca resolver como órgano colegiado y quiero hacer una precisión.

Si bien es cierto que nosotras y nosotros como integrantes de la Comisión no intervenimos en la sustanciación porque no somos parte, porque además intervenir en la sustanciación sería una violación al debido proceso, lo cierto es que una vez que concluyen estos procedimientos sancionadores ordinarios la Comisión está en oportunidad de poder conocer el expediente, porque eso qué implica, que auténticamente nosotros como integrantes garanticemos el derecho de acceso a la justicia; sería inconcebible que la autoridad resolutora —porque en eso se convierte la Comisión—, es la que aprueba el proyecto de resolución.

Para aprobar el proyecto de resolución es necesario que conozcamos las constancias que obran en el expediente, en consecuencia, quiero hacer público y quiero sostenerlo así porque tampoco no quiero que ninguna de las partes en todos estos expedientes piense que por lo que a mí respecta, resuelvo solamente con lo que se me presenta en el proyecto de resolución, porque eso no es así; yo he solicitado y así también consta en las actas de las diferentes sesiones de la Comisión de Quejas y Denuncias, he solicitado que cuando se remite el proyecto de resolución —por lo que a la de la voz respecta—, es importante también que se me remita copia certificada del expediente o bien, que se me permita también acceso al expediente.

Preguntaran a la mejor algunas personas que no conozcan de la materia jurídica porque solicita copia certificada del expediente y no copia simple, por una sencilla razón, yo tengo que tener un conocimiento completo, fehaciente, de que efectivamente integrantes de este Consejo, lo que obra el expediente es lo que a mí me están pasando como copia certificada para que no existan —digamos ahí—, alguna alteración al expediente, alguna documentación que se haya quedado en la bandeja de la copiadora, etcétera.

A mí me tienen que entregar copias certificada donde se verifique que auténticamente está completo el expediente, para que yo resuelva conforme a constancias y de ninguna manera está resolviendo contra constancias porque eso sería motivo de una irregularidad por parte mía. Entonces yo les comento, reviso los expedientes con base en esa revisión que se hace desde mi consejería, que se asume por la de la voz el voto, en el sentido de que se trate en cada uno de los casos que se pone a mi consideración.

Tratándose de temas, por ejemplo, del procedimiento especial sancionador, es importante comentarles que ahí únicamente ejerzo mis atribuciones como supervisora de los procedimientos, porque a quien le corresponde tramitar es a la Unidad. La Unidad concluye con su trabajo, remite al Tribunal, quién conoce entonces de la resolución de estos asuntos, obviamente el Tribunal; cómo se imponen del conocimiento, cómo resuelven, revisando el expediente.

Entonces esta es una cuestión que debe de hacerse por parte de todos los órganos resolutores, y quiero hacer enfática en eso porque a veces se mandan mensajes que digamos no son los adecuados tratándose de temas de resolución de este tipo de asuntos; yo quiero hacer esa precisión por lo que a mí respecta. Agradezco a todas y toda su atención.

La consejera presidenta abre tercera ronda de intervenciones por si alguien de los que ya participaron desea intervenir de nueva cuenta.

El representante propietario del partido político de Morena en su intervención manifiesta: Gracias consejera presidenta, nada más para aclarar ciertos puntos porque parece que no fui muy preciso, yo no estoy solicitando que me permitan revisar el expediente porque como ya lo dijo la consejera presidenta y las consejeras compañeras, sería una violación al debido proceso.

Pero sí es importante que por lo menos cotejen las fechas del proyecto con las fechas del documento que nos presentan mes con mes para revisar si coinciden o no las fechas, esa es la verdadera intención y claro que tiene que ver con este punto de acuerdo, si yo no reviso las fechas que son contrarias, en mí debe de haber una duda y se tiene que desahogar en este momento y en este punto, no sé por qué me están señalando abiertamente de que estamos distrayéndonos del presente punto de acuerdo, porque yo si tuviera voto, lo primero que me extrañaría es que no coincide una fecha del proyecto con la de presentación.

Si están dando por hecho que la que cuenta es la fecha del proyecto, entonces ya cada quien asumirá dicha participación, pero yo no puedo determinar esa parte que por el simple hecho de que el proyecto traiga una fecha no se equivoca a la que nos han presentado mes con mes dentro de la Comisión.

Abundando más en este tema, la consejera presidenta señala que obviamente no puede cotejar contra constancias, pero sí lo puede hacer contra las fechas que nos presentan, entonces cómo puede llegar un punto de acuerdo al Consejo General si no se ha revisado o pareciera que no le hemos dado la debida importancia a este tema, a este proyecto, porque este proyecto es igual de importante que toda la carga de trabajo que ya se ha venido reiterando, yo no veo que uno deje de ser más importante que el otro y se le debe dar la atención en los tiempos y plazos que señala la ley.

Nada más, no sé si pueda solicitar que se me haga entrega del acta que manifestó la consejera Sandra, donde hizo el extrañamiento porque desconozco la fecha y la sesión es en ese momento, y también si me pueden compartir o si alguien trae la fecha de la transición de la Comisión donde por el comentario del consejero Luis Mota, señaló que él fue el anterior presidente, si me pudieran compartir esa fecha de la Comisión por favor. Es cuanto, muchas gracias.

En uso de la voz, la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero expresa: Gracias presidenta. Con gusto representante le compartimos la información, de hecho, me viene bastante bien su solicitud. Quiero pedirle a la Unidad Técnica Jurídica que prepare un informe respecto de las gestiones de las presidencias ante la Comisión de Quejas y Denuncias para poder identificar cuántos procedimientos ingresó en cada año de gestión y cuántos procedimientos se remitieron al Tribunal Electoral; creo que eso va a despejar muchas dudas, así que con gusto remitimos ese informe.

En cuanto la Unidad Técnica Jurídica lo tenga se lo haremos llegar, previa revisión de la presidencia de la Comisión y lo compartimos por supuesto al resto de integrantes de este órgano colegiado, porque como bien lo ha mencionado, este es un tema que nos atañe a todas y a todos. Muchas gracias, es cuanto presidenta.

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández en uso de la voz refiere lo siguiente: Gracias presidenta, quise reservarme hasta este momento porque quería escuchar todas las posturas que se manifestaban en esta sesión.

Solo quiero decir que a mí me consta el trabajo dedicado, conocedor que ha empleado durante todo este tiempo el titular de la Unidad Técnica Jurídica, el licenciado Diego Ramírez, yo creo que ahí sí hay cosas que cambiar en esa Unidad, si hay cosas que revisar, pero me parece que no podemos cortar la cabeza de la persona que mejor ha desempeñado este puesto a lo largo de los casi seis años que tengo en este Instituto, si las cuentas no me fallan —la cuarta persona que ocupa esa titularidad—.

Me parece que no podemos empezar amenazando su permanencia y dudando de su desempeño, me parece que es una persona que ha dado su mejor esfuerzo, que ha trabajado con lo que tiene y que ha dado resultados en la medida de lo posible —bastante aceptables y notablemente conocedores—, y que ha contribuido al mejor desempeño de este Instituto. Por lo cual, solamente mi intervención es para dar un respaldo al titular actual de nuestra Unidad Técnica Jurídica. Es cuanto, muchas gracias.

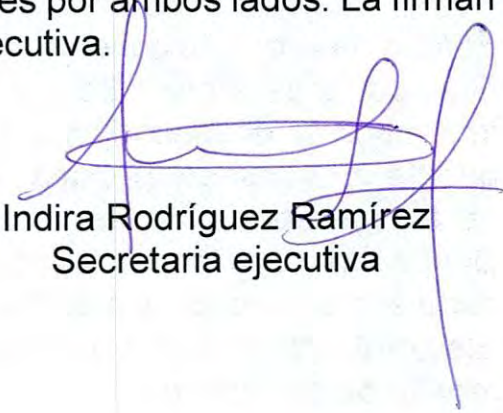
Al no existir más intervenciones, la consejera presidenta solicita a la secretaria ejecutiva someta votación de consejeras y consejeros electorales el proyecto de resolución con la incorporación de las precisiones realizadas por la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero y el representante propietario del partido político de Morena, haciendo constar que la resolución se aprobó por unanimidad de votos a las trece horas con treinta y cuatro minutos.

En desahogo del **punto cinco** del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la consejera presidenta procede a clausurarla a las trece horas con treinta y cuatro minutos del martes veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés. Asimismo, agradece a todas y todos la asistencia y participación, a las personas que siguen la sesión a través de las redes sociales institucionales y a José de Jesús Villalpando Cueva quien apoyó en esta sesión como intérprete de lengua de señas mexicanas.

La presente acta consta de trece fojas útiles por ambos lados. La firman la consejera presidenta y la secretaria ejecutiva.



Brenda Canchola Elizarraraz
Consejera presidenta



Indira Rodríguez Ramírez
Secretaria ejecutiva